



8vo. ENCUENTRO SINDICAL UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Panamá, 2 y 3 de octubre, 2017

Declaración de Panamá

El 8º Encuentro Sindical UE-CELAC, convocado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se reúne en Panamá, para preparar su posicionamiento de cara a la próxima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Este Encuentro sirve para reafirmar la unidad y solidaridad del movimiento sindical de ambas regiones, compartir visiones sobre la coyuntura social, económica y política y las perspectivas y aspiraciones de las/os trabajadoras/es. América Latina y el Caribe, así como Europa presentan una coyuntura compleja en medio de las múltiples crisis que afectan al planeta. Las/os trabajadoras/es del mundo enfrentan una nueva oleada de ataques a sus derechos y conquistas. La agenda de austeridad, que se impuso en los países del norte desarrollado, ahora impera como receta salvadora para el resto del mundo. A pesar del fracaso de esas políticas en Europa, los gobiernos de América Latina y el Caribe insisten en aplicar políticas de austeridad, recortes de la inversión social, nuevas reformas laborales y de seguridad social, con el supuesto objetivo de adaptar a los países a las demandas de la economía global.

Diagnosticamos la existencia de una batalla ideológica, política y cultural, en la cual el discurso neoliberal, a través de la crisis financiera, justifica reformas y ajustes que retroceden en materia de derechos y sirven para el mantenimiento de un sistema injusto y excluyente. Eso está presente tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, donde se pretende culpabilizar a los sistemas de protección social, los salarios, la negociación colectiva y otras políticas públicas de bienestar social, de los problemas económicos de los países con el consecuente impacto en la clase trabajadora y en sectores más vulnerables como las mujeres, jóvenes, etnias, entre otros.

En América Latina y el Caribe nuevamente está en boga un discurso que busca culpabilizar a las políticas sociales de las crisis económicas y afirmar la presunta inviabilidad de su sustentabilidad, especialmente de la seguridad social, basado en manipulaciones que apuntan el corte de derechos como única solución posible para una responsabilidad fiscal por parte del Estado, comprometiendo la capacidad estatal de

financiar políticas sociales. Tenemos que confrontar ese discurso apuntando cuales son los problemas reales: la estructura fiscal, que en la mayoría de países es regresiva; la deuda pública que es utilizada como herramienta del capital financiero; la falta de diversificación de la matriz productiva de los países de la región – dependiente de los commodities; además de la gestión cambiaria y monetaria.

Las catástrofes climáticas que han azotado diversos países de América Latina y el Caribe en los últimos tiempos marcan con dramática claridad la gravedad de la crisis ambiental, y su efectivo y urgente abordaje. Propugnamos el fortalecimiento de relaciones sociales y económicas que promuevan el equilibrio socio-ambiental con involucramiento y participación social, desarrollando tecnologías que eviten el cambio climático y la desertificación. Defendemos que los bienes comunes de la humanidad, la biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques, la energía, el conocimiento, no sean sometidos a los criterios de lucro privado sino utilizados responsablemente para el bien común. Reafirmamos con claridad la urgencia de fortalecer la acción sindical desde ambas regiones en la lucha por acuerdos efectivos en el combate al cambio climático. Rechazamos enfáticamente el boicot desplegado por el gobierno de los Estados Unidos a los Acuerdos de París en materia de Cambio Climático.

Austeridad económica y erosión de la Democracia

Primero en Europa, ahora en América Latina y el Caribe, se imponen políticas de ajuste y austeridad y reformas laborales que están afectando gravemente las condiciones de trabajo y los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. La intensidad de dichas políticas varía significativamente entre los países. En algunos de ellos se están produciendo ataques a la democracia y los valores civilizatorios. Los ataques a los derechos humanos, a los avances en materia de equidad e igualdad de género, la criminalización de la protesta social, la persecución a la acción colectiva de los sindicatos, los ataques al derecho de huelga, entre otros, se configuran en prácticas cada vez más recurrentes en ambas regiones. Otras expresiones de autoritarismo como el racismo, la xenofobia, la misoginia, la acción contra migrantes y refugiados, están en aumento en varios países de Europa e incluso comienzan a estar presentes en países de América Latina.

En América Latina y el Caribe, luego de casi dos décadas de procesos sociales y políticos de mayor inclusión y ampliación de la democracia, asistimos a una ofensiva radical conservadora, que articula la lógica económica neoliberal, descrita anteriormente, a una acción política conservadora y reaccionaria, que está poniendo en jaque a los sistemas políticos democráticos de la región.

El caso extremo de esta situación se vive en Brasil, donde una presidenta electa fue depuesta por un golpe jurídico-parlamentario-mediático, a partir del cual se viene imponiendo el mayor retroceso social en los últimos 70 años de historia, desmontando los derechos laborales, la seguridad social, congelando por 20 años la inversión social,

retrocediendo en materia de reforma agraria, protección ambiental y políticas de inclusión de género, racial y para la juventud. Adicionalmente se radicaliza el discurso autoritario y antidemocrático, criminalizando a las organizaciones sociales y políticas, judicializando a la dirigencia social e incrementando la represión y la violencia contra los movimientos sociales. Brasil luego de haber sido un país de referencia mundial en materia de avances sociales las últimas dos décadas, pasó a ser un ejemplo a seguir para la derecha internacional en materia de ataque a los derechos de los trabajadores/as y a las normas internacionales de la OIT, por obra del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

El golpe en Brasil resume el proyecto de la derecha internacional, aliada a los capitales nacionales y a las grandes corporaciones, para imponer su agenda de máxima ganancia para la minoría y mayor exclusión para la mayoría. En particular la reforma laboral en Brasil tiene un impacto que va más allá de la simple relación laboral, configurándose como el más grave ataque al sistema de protección social brasileño, que se venía consolidando en los últimos 15 años de gobiernos progresista, y que con la reforma se avanza en la precarización laboral como consecuencia de los más de cien dispositivos que la reforma impone. Es una reforma injusta, misógina, racista y que va en contra de todos los presupuestos de justicia social que pautaron los gobiernos progresistas anteriores. El impacto del golpe también es negativo para la garantía de los derechos humanos en otros países de la región, así como para los avances sociales reflejados en las dinámicas de integración regional que se ha impulsado con experiencias como las de Mercosur, UNASUR y CELAC.

En otros países de la región, como en Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala y otros, donde se desarrollan políticas que debilitan y limitan su carácter democrático, los gobiernos avanzan en una estrategia de recortes de derechos, en sintonía con la receta internacional, profundizando los problemas de desempleo, precariedad y mayor exclusión social para las mayorías.

Observamos con profunda preocupación el avasallamiento a los derechos civiles, políticos y sociales en la República Argentina, donde el gobierno desconoce las resoluciones y convenios internacionales firmados en materia de Derechos humanos, muestra signos alarmante de políticas represivas, de persecución a los líderes sindicales, sociales y especialmente a los pueblos originarios, así como una estigmatización a los jóvenes y a todos los grupos sociales que muestren disidencia. A dos meses de la desaparición forzada del militante social Santiago Maldonado y a casi dos años de la prisión de Milagro Sala denunciamos el deterioro de la calidad de la democracia en este país.

Alertamos nuevamente sobre la violación sistemática de los DDHH en México y a dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, continuamos exigiendo al Estado mexicano que culminen las investigaciones y se establezcan las responsabilidades.

En los últimos meses se han realizado importantísimos avances para encontrar una salida al conflicto armado que ha afectado al pueblo colombiano por las últimas 5 décadas. Manifestamos nuestro firme respaldo al proceso de paz en Colombia y saludamos el proceso iniciado entre el ELN y el gobierno. Exigimos el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz y rechazamos cualquier iniciativa intervencionista que pretenda obstaculizar este proceso.

Los últimos años, y especialmente en el año 2017, Venezuela se ha convertido en un grave motivo de preocupación para la región y el mundo, debido al persistente conflicto político, a la violencia en las calles, la situación de deterioro social para la población producto de la alta inflación, la especulación, el desabastecimiento y el acaparamiento de bienes, especialmente alimentos y medicinas y sus impactos en pérdidas de vidas, daños económicos y sociales. Para el sindicalismo de ambas regiones es fundamental el respeto a la democracia, a la libertad sindical y los DDHH que permita el progreso de la sociedad venezolana. Condenamos el uso de la violencia por parte de cualquiera de los actores políticos, las violaciones a los DDHH deben ser investigadas y sus responsables castigados.

La comunidad internacional debe favorecer el diálogo responsable y con resultados entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Lamentamos la interrupción del diálogo convocado por el gobierno de República Dominicana, con la facilitación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el acompañamiento del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Es imperativo retomar el camino del diálogo político y de acuerdos reales para la Democracia y la Paz de nuestras/os hermanas/os venezolanas/os. Rechazamos cualquier tipo de medidas de fuerza como las anunciadas por el gobierno de los EE.UU. contra Venezuela. Así mismo cualquier otra medida de un gobierno o grupos de gobiernos que no contribuya a la resolución del conflicto en Venezuela.

En Europa las políticas de austeridad condujeron a una grave situación social en diversos países debido a los fuertes ajustes laborales cuya imposición fue respondida por los trabajadores. En el plano político los grandes partidos tradicionales han retrocedido mientras avanzan fuerzas populistas y xenófobas que rechazan la inmigración y proponen el abandono de la UE. El voto favorable al Brexit en Gran Bretaña y la negativa de muchos gobiernos a colaborar con la UE para atender solidariamente la afluencia de refugiados también ha puesto en duda el proyecto de unidad que representa la UE. Aunque en los últimos meses las expectativas de triunfos electorales de la extrema derecha se han frustrado en Austria, Holanda y Francia, su fuerza sigue siendo muy preocupante, como muestra el hecho de que por primera vez han entrado en el Parlamento alemán con 94 diputados.

Pasado lo peor de la crisis económica y financiera los efectos sociales aun los sufren los ciudadanos. El desempleo sigue en cifras muy altas: más del 10% en cinco

estados miembros, el 21% en Grecia y el 17% en España afectando de manera especialmente grave a los jóvenes. Aunque el empleo ha aumentado también la precariedad y la temporalidad son más altas.

La CES está haciendo propuestas en dirección de la Europa Social que reclamamos. Exige que el llamado Pilar Social que propone la Comisión sea más fuerte y que se implante una legislación europea que garantice igualdad de salario por igual trabajo. Los ataques a los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores en algunos países como Polonia, Hungría o Turquía han sido rechazados por la CES y por sus organizaciones afiliadas exigiendo el respeto a la libertad de expresión y de asociación y la no discriminación.

Ante un escenario internacional cada vez más complejo para las/os trabajadoras/es, el sindicalismo eurolatinoamericano representado en la CES y la CSA debe jugar cada vez más un rol activo, resistiendo a los ataques contra sus conquistas, movilizándolo sus fuerzas y construyendo agendas alternativas para pasar a la ofensiva. Tanto en América Latina como en Europa la tarea de organizar, representar y defender a todas/os las/os trabajadoras/as es fundamental para garantizar la democracia y ampliar los derechos de toda la sociedad.

Igualmente, se hace necesario promover formas novedosas para la acción sindical nacional y transnacional. Actuar frente al modelo corporativo mundial y especialmente frente a las cadenas de valor en las que se organizan las empresas multinacionales para maximizar sus ganancias. Es necesario una acción sindical conjunta que pueda utilizar instrumentos internacionales, como los Acuerdos Marco Globales (AMG) que sirven para proteger los intereses de los trabajadores a través de todas las operaciones de una empresa multinacional, la Declaración sobre EMN de la OIT, las Directrices de la OCDE sobre EMN y los Principios Rectores sobre EMN de la ONU, reconociendo las limitaciones de dichos instrumentos y procurando formas de cumplimiento vinculante de las obligaciones de las empresas con los DDHH, como la adopción de un Tratado Vinculante sobre Empresas y DDHH en la ONU.

Las dinámicas de acumulación profundizada en las últimas décadas han sido promotoras y beneficiarias del proceso de financiarización de la economía a nivel global y están destruyendo el medio ambiente y el Estado de bienestar social. En el mismo sentido la elusión y evasión fiscal, así como los paraísos fiscales, contribuyen al aumento de la desigualdad, impiden el desarrollo sustentable en los países, profundizan la pobreza y expanden el poder de las corporaciones y multinacionales. La profundización de los sistemas democráticos es la vía principal para enfrentar esas dinámicas.

Realizamos un llamamiento a la acción respecto a la crisis mundial de los refugiados, con más de 65,5 millones de personas que sufren desplazamiento forzoso huyendo de la violencia y las crisis económicas y ambientales, la gran mayoría de países en desarrollo. Las/os trabajadoras/es migrantes son parte fundamental del desarrollo

económico y social de nuestros países. Combatimos firmemente el intento de demonización y persecución de las/los migrantes y la obligación de asegurar que sus derechos en tanto que trabajadoras/es y sus derechos humanos en general sean respetados.

Cumbres UE-América Latina y Caribe: Los déficits persistentes

A pesar de todas las declaraciones y planes de acción adoptados, el balance de las cumbres birregionales sigue estando en déficit desde el punto de vista de los resultados concretos para las sociedades de ambas regiones. Más allá de la ritualidad de los encuentros cada 2 años, observamos una parálisis y hasta un retroceso, respecto de la importancia que deberían jugar agendas importantes como la democracia y los derechos humanos, la integración y el desarrollo.

Del balance de dos años, desde la última cita en Bruselas, observamos que se han profundizado los problemas para las/os trabajadoras/as y los pueblos de ambas regiones. La perspectiva de un desarrollo sustentable, considerando el equilibrio de los componentes económicos, sociales, ambientales y políticos, si bien ya eran deficitarios en la región en los últimos años, actualmente son prácticamente inexistentes en la consideración de los países de América Latina y el Caribe. La lógica económica depredadora en lo económico, social y ambiental es la que se está imponiendo, destruyendo las pocas conquistas en materia de protección social y ambiental, como en el caso de Brasil, donde las empresas de capital nacional y transnacional están siendo atraídas a partir del desmontaje de las leyes y la institucionalidad creada en décadas de construcción de políticas de estado.

Integración birregional o nueva lógica de sujeción

En los últimos dos años hemos asistido a la parálisis del proceso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), frenado por la corta visión de los gobiernos conservadores que han paralizado la posibilidad de desarrollar un proceso de integración con perspectiva estratégica que represente globalmente a la región. La CELAC bien podría estar prestando un importante aporte a la identificación de salidas comunes a los problemas económicos y sociales de la región y al diálogo constructivo y respetuoso con la UE y otros bloques regionales. Por el contrario, observamos una acelerada política de alineamiento de la mayoría de los gobiernos de ALC a los bloques de dominación hegemónicos y la adopción de posturas internacionales que frenan la integración y socaban la soberanía y autodeterminación de la región. En este sentido, reafirmamos la preocupación de las centrales sindicales colombianas y manifestamos nuestra oposición al ingreso de Colombia a la OCDE que ha sido utilizado por el gobierno colombiano y los empresariados en su negativa para modificar el grave estado de situación en materia de derechos laborales y libertad sindical, entre otros asuntos.

A partir de la elección del gobierno de Donald Trump en los EE.UU., el mundo ha entrado en una nueva y más profunda fase de turbulencias, agudizando la crisis económica y financiera, exacerbando conflictos y guerras en varias regiones del mundo y amenazando los mínimos consensos internacionales alcanzados en cuestiones como el Cambio Climático o los temas migratorios. Observamos con preocupación y repudio la escalada belicista entre Estados Unidos y Corea del Norte. Frente a ese escenario será muy importante el papel que bloques regionales como la Unión Europea y la CELAC puedan desempeñar para mantener un mundo no condicionado a los intereses de una potencia o un grupo de potencias, sobre el conjunto de la humanidad. En el caso de América Latina y el Caribe, poder mantener una visión que contemple la diversidad y pluralidad económica, política y cultural de la región es fundamental para poder ser un actor internacional que influya sobre los destinos de la región y del mundo.

LLAMAMIENTO SINDICAL

El movimiento sindical de Europa y América Latina y el Caribe, convocado por la CES y la CSA, reunido en Panamá, los días 2 y 3 de octubre, presenta las siguientes propuestas y demandas a las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Pedimos, en primer lugar, a los Gobiernos que se convoque la Cumbre que ha sido aplazada, para poder abordar los compromisos de la agenda UE- CELAC.

Desde la solidaridad mutua, expresamos nuestra convicción de que el sindicalismo internacional debe jugar un papel importante ante la situación económica internacional y también en las relaciones entre la UE y CELAC.

Reiteramos nuestra oposición a las políticas que pretenden cargar en las/os trabajadoras/es y los pueblos, la superación de esta nueva fase de la crisis del capitalismo mundial. Frente al desmontaje de los derechos laborales y sociales y los ataques a la democracia, el movimiento sindical ratifica su compromiso de movilización y lucha unitaria contra quienes pretenden seguir favoreciendo a los dueños del capital y las corporaciones. Y también contra las políticas de los gobiernos que llevan a sus países a la pobreza.

Compartimos nuestro compromiso con los movimientos sociales, los defensores de DDHH, del medio ambiente, líderes comunales, periodistas, en la defensa común de las libertades democráticas esenciales, de expresión, asociación y manifestación.

Demandamos de los gobiernos de ambas regiones un verdadero compromiso de progreso y la adopción de políticas que protejan y desarrollan el empleo, aseguren salarios dignos y una protección social de calidad, como mecanismos efectivos contra la

exclusión y la pobreza. Garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, como instrumentos para ampliación de los derechos y fortalecimiento de la verdadera democracia, es una obligación de todos los estados, tal como se han comprometido en los Convenios de la OIT. Reiteramos nuestra solicitud de que los derechos incluidos en el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social se hagan extensivos a todos los países UE – CELAC.

Pedimos a los Gobiernos de ambas regiones que impulsen la aprobación de medidas efectivas contra el fraude, la elusión fiscal y la actividad ilícita de los paraísos fiscales. Instamos a que dichas medidas sean también incluidas en un capítulo específico de los tratados comerciales y de asociación económica bilaterales y birregionales.

La UE y la CELAC deben estimular políticas birregionales que favorezcan el desarrollo sustentable, el comercio justo y el empleo decente, frente a la radicalización de la agenda de libre comercio que profundiza los déficits sociales y ambientales. Los Acuerdos de Asociación existentes poco han resultado en beneficio para los países de América Latina y el Caribe y las iniciativas hacia su re-negociación son hacia un sentido de mayor profundización de los desequilibrios entre las dos regiones. Los instrumentos vinculados a los temas laborales han sido poco efectivos para proteger a los trabajadores/as y garantizar sus derechos frente al ataque que vienen sufriendo.

Alertamos sobre la aceleración para suscribir el Acuerdo UE y MERCOSUR en el próximo mes de diciembre en el marco de la XI Conferencia Ministerial de OMC, cuya intencionalidad por parte de los presidentes Michel Temer, de Brasil, y Mauricio Macri, de Argentina, es instrumentalizar ese espacio y escenificar un espectáculo sobre la inserción de la región en el comercio mundial y por parte de Europa de enviar un mensaje al Presidente Donald Trump sobre la pervivencia del multilateralismo.

La CES y la CCSCS han exigido conjuntamente a los negociadores sobre la necesidad de un acuerdo justo y equilibrado que contemple las diferencias de desarrollo de los bloques y hacia el interior de ellos, a través de un trato especial y diferenciado y exigiendo cláusulas de salvaguardas para las industrias nacientes. Asimismo, han reiterado la exigencia de la inclusión de un Capítulo Socio-Laboral, que ha sido presentado por los sindicatos desde el inicio de las negociaciones. Igualmente, alertamos sobre el riesgo que implica firmar un acuerdo de tanta trascendencia, en un marco de profunda ilegitimidad del gobierno de Brasil y una crisis de la integración de los pueblos del Cono Sur.

En esta última fase, los negociadores se han visto obligados por el accionar sindical a iniciar un diálogo sobre los contenidos del acuerdo, y si bien la opacidad sigue siendo importante, evidenciamos que este acuerdo es altamente desequilibrado con la inclusión de temas de sensibilidad extrema para las economías de menor desarrollo relativo, y su tratamiento acelerado como es el caso de Propiedad Intelectual, Compras Públicas, empresas estatales, régimen de origen, comercio electrónico, entre otros. Todos

ellos, temas que la OMC impulsa para su XI Conferencia Ministerial en diciembre de 2017 y que coloca a los países en desarrollo en una disyuntiva de profundización de una división del trabajo asimétrica, que perpetua y profundiza la condición histórica de América Latina y Caribe como proveedora de materias primas e importador de tecnología y de bienes de alto valor agregado, condenando a su población a la precarización y la pauperización de sus condiciones de vida.

El movimiento sindical europeo y mexicano ha expresado en numerosas ocasiones la necesidad de que la re negociación en curso del Acuerdo UE – México se lleve a cabo con transparencia y participación de la sociedad civil de ambas Partes.

En referencia a los Acuerdos vigentes entre la UE – América Central y UE – Perú/Colombia constatamos que los mecanismos de participación de la sociedad civil en el seguimiento de estos acuerdos hasta el presente están siendo insuficientes. Los llamados “Grupos Asesores” (DAG) no están constituidos en algunos países, en otros los sindicatos han sido excluidos o los grupos instalados carecen de la debida representatividad. Igualmente, los miembros de estos grupos asesores no tienen recursos para poder desarrollar su actividad.

Asimismo, reiteramos la exigencia del cumplimiento de los Convenios y Normas Fundamentales de la OIT en el ámbito de las relaciones Unión Europea - América Latina y el Caribe.

Finalmente aspiramos que la próxima Cumbre UE – CELAC defina una agenda creíble y viable de compromisos para avanzar en la relación entre ambas regiones en favor de los países y las mayorías sociales. Tanto las Declaraciones oficiales, como las de la Sociedad Civil y Sindicales, dan cuenta de un repertorio de medidas y acciones políticas a ser implementadas. Pasar de la retórica y las cumbres ceremoniales a la acción concreta en favor de las sociedades de Europa y América Latina y el Caribe continúa siendo una deuda a ser saldada.